

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL

DR. GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO
Magistrado Ponente

Pereira, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	Impugnación de Acción de Tutela
RADICADO:	660013105001202200347-01
ACCIONANTE:	LUIS ERNESTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ACCIONADAS:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
TEMA:	DERECHO DE PETICIÓN

SENTENCIA No. 42

Aprobado por Acta No. 119 del 23 de noviembre de 2022

En la fecha y una vez cumplido el trámite de ley, se decide el recurso de impugnación interpuesto por el accionante frente al fallo de primera instancia del 11 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda.

I. ANTECEDENTES

El señor LUIS ERNESTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al considerar vulnerado y amenazado su derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Política.

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes,

HECHOS

Señaló que figura como apoderado de los ciudadanos MARÍA RUBIELA CUARTAS VERGARA, JESSICA LORENA MARÍN CUARTAS, CRISTIAN DAVID MARÍN CUARTAS, DUVAN ALBERTO MARÍN CUARTAS y ALBEIRO DE JESÚS MARÍN CUARTAS, dentro del proceso administrativo de reparación directa bajo

radicado No. 66001333300220150026600. Que el 31 de agosto de 2022, inició trámites para el cumplimiento de la sentencia y presentó la solicitud de expedición de la cuenta de cobro ante la Fiscalía General de la Nación, la cual, resulta ser necesaria para la asignación del turno en el pago de las condenas impuestas en la sentencia de reparación directa; sin embargo, la entidad no ha dado respuesta a la petición.

PRETENSIONES

El demandante solicita se tutele su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Oficina Jurídica Grupo de Pagos y Sentencias Judiciales Nivel Central Bogotá, y/o a quien corresponda, resolver íntegramente en el término de 48 horas, la solicitud de cuenta de cobro presentada el día 31 de agosto de 2022; para que le sea asignado un turno de pago a la cuenta de cobro presentada de la sentencia de reparación directa.

POSICIÓN DE LA ACCIONADA

La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** señaló que se presenta una carencia actual de objeto e inexistencia de vulneración del derecho fundamental de petición, toda vez que, mediante oficio con radicado No. 20221500085911 del 04 de octubre de 2022, se dio respuesta al derecho de petición presentado por el demandante, en el cual se le informó que *para reclamar la obligación mencionada deberá dar cumplimiento a los requisitos previstos en el Decreto 2469 de 2015, capítulo V, artículo 2.8.6.5.1, y demás normas complementarias*. De este modo, se solicitó al accionante anexar a la solicitud los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados, junto con los demás documentos necesarios para liquidar su valor, incluidos todos los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para realizar los pagos. Finalmente, se informó que una vez se dé cumplimiento a lo requerido, la Dirección procederá a asignar turno de pago.

Por lo anterior, solicita se declare improcedente la acción de tutela.

FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia del 11 de octubre de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito, resolvió negar la acción de tutela instaurada y conminar a la FISCALÍA que indique al accionante el término para allegar la información solicitada en el oficio DAJ-10400- del 04 de octubre de 2022.

Como fundamento de la decisión, la *a quo* señaló que, la solicitud presentada por el accionante se encuentra incompleta, por lo que, es válido que la entidad tenga potestad para requerir documentación o que se complete la información brindada, para lo cual cuenta con 10 días siguientes a la radicación de la solicitud, en los términos legales que regulan el derecho de petición.

En consecuencia, consideró que aunque la entidad omitió determinar el tiempo para completar la solicitud, ello no vulnera el derecho de petición del accionante, por lo que, conminó a la entidad a establecer un tiempo para el aporte de la información y negó la acción de tutela.

IMPUGNACIÓN

El accionante interpuso la impugnación frente al fallo de tutela proferido en primera instancia, bajo el argumento de que radicó ante la FISCALÍA el documento No. 202226110359592 con fecha del 10 de octubre de 2022 como respuesta al requerimiento del 31 agosto y No. JL-28508 del 04 de octubre de 2022. Manifestó que la adopción de la sentencia de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada del menor FENIBER AUGUSTO MARÍN CUARTAS, existe un serio compromiso en el amparo de los derechos humanos, por lo que considera que la respuesta al derecho de petición debe ser de utilidad para el peticionario, de lo contrario no está atendiendo en debida forma este derecho constitucional, pues la respuesta debe ser de fondo, expresada claramente y si es necesario, sugerir el procedimiento a seguir.

Procede la Sala a decidir previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Sobre la Acción de Tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la **Acción de Tutela** como un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir ante los Jueces Constitucionales a reclamar la protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, sin mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener oportuna resolución. Así pues, la Tutela procede frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de dichos derechos fundamentales, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; de esta forma, se propende por cumplir uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente.

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que consagró la Constitución de 1991, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido, la Acción de Tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario que no puede ser asumida como una institución procesal alternativa, supletiva, ni sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas.

Sobre el Derecho Fundamental de Petición

En relación con el contenido del artículo 23 Superior, la Corte Constitucional ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho fundamental, la acción de tutela es el mecanismo creado para lograr su protección cuando quiera que resulte amenazado o vulnerado por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, en ciertos eventos por los particulares, ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía.

En providencia T-054 del 2004, la Corte delimitó los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos característicos:

“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa,

2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión;

3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado;

5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;

6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;

7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares;

8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;

9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y

11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.”

Asimismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló:

*“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; **ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorable a los intereses del peticionario, iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al solicitante.”***

De lo anterior es preciso concluir que, la protección del derecho fundamental de petición requiere una respuesta de fondo, oportuna y, además, debe ser debidamente notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho se ve protegido.

Caso Concreto

Descendiendo al caso bajo estudio, de las pruebas allegadas se evidencia que el demandante presentó una solicitud de cuenta de cobro ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el pasado 31 de agosto de 2022, con el fin de obtener la asignación de turno para el pago de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Pereira, confirmada por el Tribunal Superior de dicha especialidad y ejecutoriada el 13 de mayo de 2022.

Posteriormente, en el transcurso de la acción de tutela en primera instancia, la accionada dio respuesta al derecho de petición mediante oficio No. DAJ-10400 del 04 de octubre de 2022, en la cual, le informa al accionante que para reclamar la obligación debe cumplir los requisitos previstos en el Decreto 2469 de 2015, capítulo V, artículo 2.8.6.5.1., por consiguiente, se le solicitó completar la información con los siguientes datos:

“a. Los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados (No puede ser la misma, cada uno aporta la propia). No obstante aportar correos electrónicos se requiere la información completa.

(...)

f. Los demás documentos que por razón del contenido de la condena u obligación, sean necesarios para liquidar su valor y que no estén o no deban estar en poder de la entidad, incluidos todos los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para realizar los pagos.”

El accionante al momento de presentar la impugnación de la sentencia que resolvió negar la acción de tutela por encontrarse debidamente contestado el derecho de petición, anexó la complementación de la solicitud de cuenta de cobro por medio del oficio radicado el 07 de octubre de 2022,

en el cual, se identifica a cada uno de los beneficiarios MARÍA RUBIELA CUARTAS VERGARA, JESSICA LORENA MARÍN CUARTAS, CRISTIAN DAVID MARÍN CUARTAS, DUVAN ALBERTO MARÍN CUARTAS y ALBEIRO DE JESÚS MARÍN CUARTAS con su número de cédula, dirección, contacto telefónico y correo electrónico de cada uno.

Pues bien, en primer lugar, debe decirse que previo a la interposición de la acción de tutela en primera instancia, la petición no había sido contestada por la entidad dentro del plazo legalmente determinado (15 días hábiles), ya que, la solicitud se elevó el 31 de agosto de 2022, la tutela se interpuso el 29 de septiembre y la contestación al derecho de petición incoado fue el 04 de octubre del mismo año; por ende, lo que correspondía a la *a quo* era tutelar el derecho fundamental de petición y, posteriormente, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, indicando al demandante la información que debía complementarse.

Ahora, en el trámite de la segunda instancia, el actor allegó oficio del 07 de octubre de 2022 que contiene la información faltante respecto de los beneficiarios y sus datos personales correspondientes. Entonces, se puede concluir que cumplió con la carga de complementar el derecho de petición con los datos requeridos por la FISCALÍA. En este punto, corresponde a la entidad accionada efectuar una nueva revisión de los documentos e información allegada por el accionante y definir si cumplió o no con los requisitos del Decreto 2469 de 2015, capítulo V, artículo 2.8.6.5.1., para la asignación del turno en cuestión; por ende, teniendo en cuenta que se allegaron los datos faltantes y ha transcurrido el tiempo sin una respuesta por parte de la entidad accionada, se ordenará a esta para que emita una respuesta de fondo a la petición del 07 de octubre.

Debe decirse que el requerimiento de la FISCALÍA en el literal *f* de la contestación del 4 de octubre, donde indicó que el actor debía adicionar “*Los demás documentos que por razón del contenido de la condena u obligación, sean necesarios para liquidar su valor y que no estén o no deban estar en poder de la entidad, incluidos todos los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para realizar los pagos*”, no cumple con los parámetros jurisprudenciales que se exigen para la contestación de un derecho de petición, puesto que no resulta clara y no especifica de forma detallada cuáles

son los demás documentos, tampoco señala cuáles son los documentos requeridos por el SIIF-Nación, lo cual, contradice lo expresado por la Corte Constitucional que dijo: *La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado*¹; de ahí que, resulta necesario ordenar a la accionada que, si no lo ha hecho, en el término de 48 horas, comunique al accionante si cumplió o no con los requisitos del Decreto 2469 de 2015, capítulo V, artículo 2.8.6.5.1.; y en caso negativo, deberá informar de forma clara, detallada y precisa, los documentos y/o información necesaria para la asignación del turno en el pago de la sentencia ejecutoriada.

Así las cosas, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se tutelaré el derecho de petición indicando la existencia de la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la petición elevada el 31 de agosto de 2022 y ordenando a la entidad dar una respuesta de fondo a la solicitud complementada el 07 de octubre de 2022.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, en su lugar, **TUTELAR** el derecho fundamental de petición del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la petición elevada el 31 de agosto de 2022 por el accionante.

TERCERO: ORDENAR a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para que, si no lo ha hecho, en el término de 48 horas comunique al accionante si cumplió o no con los requisitos del Decreto 2469 de 2015, capítulo V, artículo 2.8.6.5.1. En caso negativo, deberá informar de forma clara, detallada y precisa, los documentos y/o información necesaria para la

¹ Ver sentencia T-054 del 2004 de la Corte Constitucional.

asignación del turno en el pago de la sentencia ejecutoriada, teniendo en cuenta la solicitud elevada el 31 de agosto de 2022 y complementada el 07 de octubre de 2022.

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y términos consagrados en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente fallo, **REMÍTASE** de forma electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente Acción de Tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual **REVISIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ

Firmado Por:

German Dario Goez Vinasco
Magistrado
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Julio Cesar Salazar Muñoz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 2 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Olga Lucia Hoyos Sepulveda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 4 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **58e1d1139e17221c9a1dde7b9936d51509ea1461d953203ef0da581e0c1f441b**

Documento generado en 24/11/2022 07:47:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>